

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero 18 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívense á su vez el Toca.—Rúbricas de los Señores Presidente Iglesias, y Ministros Ramírez, Auza, Guzman y García.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico, México, Enero 14 de 1874.—Alejo Gomez Eguarte, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por D. Antonio de la Peña, como socio gerente del establecimiento de comercio Peña y Compañía de Mazatlan, contra el Administrador de la Aduana marítima de ese puerto, por varias acusaciones.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito.

Siendo el presente juicio de amparo promovido por los Sres. Peña y Compañía enteramente igual en sus fundamentos y circunstancias al que tienen promovido los Sres. T. Heymann y Compañía, reproduzco aquí el dictámen que en dicho juicio tengo emitido.

“Los Sres. T. Heymann y Compañía, solicitaron de V. amparo contra los procedimientos del C. Admor. de la Aduana marítima que obrando en virtud de las órdenes del Supremo Gobierno, trata de exigir de dichos Sres. el pago de 8.229 pesos 68 centavos, que es la tercera parte de los derechos que causaron las mercancías importadas por el bergantin “Amanda” y que segun la manifestacion que los mismos Sres. hicieron al C. general Sóstenes Rocha, pagaron á los pronunciados que ocupaban es-

ta plaza. La queja de amparo se funda. C. Juez, en asentar que el C. Administrador de la Aduana marítima no es autoridad competente para proceder contra dicha casa supuesta su resistencia en pagar de plano la tercera parte de derechos á que por equidad el Supremo Gobierno tuvo á bien reducir la responsabilidad íntegra que les resultaba por haber indebidamente pagado á autoridades que no eran las legítimas, y esto cuando estando precisamente clausurado el puerto en virtud de disposiciones legislativas anteriores y despues del precedente de Tampico nadie ignoraba que se hiciera efectivo el doble pago de derechos, siempre que estos se pagaran á la revolucion. Es cierto que de parte de los Sres. T. Heymann militan diversas razanas que sin duda fueran atendibles; pues el mismo general Rocha que estuvo inexorable respecto de otras casas importadoras, tuvo á bien eximir á aquellos Sres. de dar pagarés y solo quedó su responsabilidad pendiente de la Suprema resolucion del Gobierno. Es cierto tambien que no firmaron fianza alguna segun informa el Administrador de la aduana; pero tambien lo es, que el Gobierno al resolver sobre los pagos hechos en Mazatlan y obrando como debía obiar por medio de una medida general y sin duda la mas equitativa, resolvió que todos sin escepcion deberian pagar solo la tercera parte. Pues bien, aquí entra perfectamente la facultad coactiva de parte del Administrador de la aduana que tenia que hacer efectivo el pago decretado en virtud de disposiciones legislativas anteriores al hecho, y que el Gobierno en virtud de ellas, solo habia por equidad hecho mas benigno; debia, pues, proceder á requerir de pago y en caso contrario, á asegurar bienes equivalentes á cubrir los adeudos fiscales.

Que los procedimientos de dicho C. Administrador no son conformes con las leyes que reglamentan la facultad coactiva; seria cierto y podria producirse como prueba en

un juicio contencioso y declarativo; pero que el Administrador tiene la facultad y el deber de proceder por los trámites expeditivos y sumarios al aseguramiento de los intereses fiscales y solo con el fin de que estos no se hagan ilusorios dejando á la Hacienda pública pelear despojada, es lo que creo insostenible, y de ninguna manera importa la violacion del artículo 16 de la Constitucion general de la República.

Por lo espuesto es, que dejando á salvo en todo tiempo á los Sres. T. Heymann, el ejercicio de sus acciones ante los jueces y por los trámites ordinarios, y considerando al Administrador de la aduana marítima como autoridad competente para el aseguramiento de los derechos fiscales, pido que se declare: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. T. Heymann y Compañía contra los procedimientos de la Aduana marítima de este puerto.

De la misma manera y salvas las variaciones indispensables, creo que debe resolverse este juicio promovido por los Sres. Peña y Compañía.

Mazatlan, Enero 23 de 1873.—L. Gaona.

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Mazatlan, Febrero 18 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por D. Antonio de la Peña como socio gerente de la casa de comercio "Peña y Compañía" contra la providencia dictada por el O. Administrador de la Aduana marítima, en uso de la facultad económico-coactiva que le concede la ley de 20 de Enero de 1827, por la que se exige á dichos Sres. la cantidad de onco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos, veintitres centavos, tercera parte de los derechos de importacion que causaron las mercancías descargadas en este puerto de la Barca "Gironde" conminándolos al mismo tiempo con exigirles el total valor de ellos, si no satisfacian en el acto la expresada cantidad: Visto también

TOMO V.—PARTE II.

que á consecuencia de haberse negado el quejoso á enterar la tercera parte que se le exigió, se dió la orden para que se cerrara el establecimiento mercantil que se gira bajo la razon social "Peña y Compañía" por cuyo motivo se pidió tambien la suspension de tal providencia, alegando para esto que el ocurno está fundado en la frac. 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1827 por quejarse de que con tal providencia se violan las garantías que los artículos 4º y 16 de la Constitucion general otorgan á todo habitante de la República; diciéndose que la primera se viola, porque al cerrarse su establecimiento se priva á la repetida casa de la industria y trabajo que ejerce; y que la segunda se vulnera, supuesto que dicho Administrador no es autoridad competente para dictar y mandar ejecutar su providencia. Visto por último lo resuelto sobre tal pedido; el informe del referido empleado; lo alegado por el O. Promotor fiscal; las pruebas presentadas por el quejoso; su alegato de 15 del corriente con todo lo mas que ver convino. Y considerando que por lo que se expone en el escrito con que se entabla este juicio, se deduce que el amparo se pide, no porque se desconozca ó se niegue la accion que tenga el Juez para cobrar los derechos que reclama; sino porque no se considera al O. Administrador de la aduana marítima como autoridad competente para haber dictado la providencia contra la que se pide amparo, en razon de que en el presente caso no puede ser aplicable la citada ley de 20 de Enero de 1827.

Considerando igualmente que ésta, en su artículo 1º prohíbe á los empleados ingerirse en la jurisdiccion contenciosa que corresponde á los jueces; y en su artículo 2º declara por negocios contenciosos aquellos en que sean forzosas las actuaciones judiciales ó en los que se dispute la paga por la variacion de tiempo y circunstancias y ofrezcan motivo fundado de duda sobre la aplicacion de la ley prohibiendo en el tercero que pueda tener lugar providencia

alguna coactiva, cuando el derecho del fisco no sea claro é indudable:

Considerando igualmente; que en el caso en que se encuentran los Sres. "Peña y Compañía" son forzosas las actuaciones judiciales, para por medio de ellas aclarar si los Sres. "Peña y Compañía" sean los verdaderos responsables de los derechos que se les cobran; á la vez que habiendo justificado con los documentos que por vía de prueba presentaron que el importador de las mercancías que trajo la barca "Gironde" fué D. Guillermo Girardin como apoderado del capitán de dicho buque D. J. Ducan y consignatario al mismo tiempo de las mismas mercancías sin que aparezca mas razón de tener por importadora de ellas á la casa que representa el quejoso; que la simple exposicion que hizo la comision encargada de revisar las manifestaciones que se presentaron al C. general Rocha de los negocios mercantiles que se descargaron en la época que estuvo este puerto ocupado por los revolucionarios y en cuya exposicion se dijo sin fundamento alguno segun el informe del C. Administrador de la Aduana marítima de 20 del próximo pasado, constante á fojas 7: que "D. Guillermo Girardin es la casa conocida en este puerto por Peña y Compañía" de donde resulta la cuestión contenciosa en la que debe resolverse quien sea el verdadero responsable de tales derechos.

Considerando así mismo; que por razon del tiempo en que hizo su descargo la barca "Gironde" y las circunstancias que á ella precedieron, se presenta ya un motivo fundado para dudar si el fisco tiene ó no accion á exigir la cantidad que reclama, supuesto que se alega que para ello intervino fuerza y coaccion cuya excepcion como admisible en derecho, debe ser calificada por los Tribunales y por lo mismo no se puede decir con toda propiedad legal que el que reclama la hacienda pública sea claro é indudable.

Considerando por último que si bien la

hacienda pública debe ser satisfecha de los derechos que cobra, despues que se resuelva si es ó no de atenderse la excepcion que se opone, no por esto puede usarse de la facultad económico-coactiva en que el Administrador fundó su procedimiento tanto porque hasta la fecha no está resuelto por los medios legales quien sea el importador, como tambien porque el fisco nada pierde con sugetar á juicio formal su reclamacion, á la vez que ésta la puede ejercitar en todo tiempo ya sea contra los quejosos ó los bienes que les sean conocidos, segun lo que los tribunales resuelvan con conocimiento de causa y en méritos de justicia. Por estas razones, y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitucion general y teniendo á la vista la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, dada en 11 de Mayo de 1871, constante á fojas 194 y 196 de la 2ª parte del "Semanario Judicial", fallo con las siguientes proposiciones:

Primera: La Justicia de la Union ampara y protege á D. Antonio de la Peña, como socio gerente de la casa "Peña y Cª" contra la providencia que el C. Administrador de la Aduana marítima dictó para exigir á dicha sociedad la cantidad de once mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos, veintitres centavos como tercera parte de los derechos de importacion que causaron las mercancías descargadas en este puerto de la barca "Gironde" y por la que se le conmina tambien al pago íntegro de aquellos si no enteran de pronto la expresada cantidad.

Segunda: Sáquense dos copias de esta sentencia, una para publicarse en el periódico oficial del Estado y otra para remitirse al "Semanario Judicial".

Tercera: Prévía notificación, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision. El C. Lic. Pedro S. Bermudez, Juez de Distrito del Estado, así lo proveyó y firmó por ante mí. Doy fé.—Pedro Bermudez.—Francisco Medina, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero 11 de 1874. Visto el presente juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por el C. Antonio de la Peña, como socio gerente de establecimiento de comercio «Peña y Compañía» de Mazatlán, contra el Administrador de la Aduana marítima de ese puerto que exige á dicha Compañía, por medio de la facultad económico-coactiva, la cantidad de \$ 11,485 23 centavos, 3ª parte de los derechos aduanales que causaron las mercancías importadas por el buque «Gironde» para cuyo pago se señaló el término de tres días, con conminación de exigir el total de los derechos causados si se dejaren transcurrir sin verificar el pago, lo cual habiendo sucedido así, se ha intentado además cerrar el establecimiento mercantil de la Compañía. Con cuyos procedimientos se violan en concepto del quejoso, los artículos 4º y 16º de la Constitución Federal, pues según manifiesta la casa «Peña y Compañía» ni fué consignataria de los efectos importados por el buque «Gironde», ni existen pruebas admisibles de que tuviera intervención alguna en esas mercancías, que la haga responsable ante el Fisco, y Considerando:

Que según el informe remitido á esta Suprema Corte por el Administrador de la Aduana marítima de Mazatlán, las mercancías importadas por el buque «Gironde» han existido y se han expendido en la casa de «Peña y Compañía» y que la acción del Fisco para reclamar los derechos aduanales, se dirige ante todo contra el tenedor de los efectos que han causado esos derechos.

Por tales consideraciones, no apareciendo que haya habido violación de garantías por parte de la Aduana marítima al asegurar en el caso presente el interés de la Hacienda pública, por medio de las facultades que le concede la ley, con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, se decreta:

1º: Es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 18 de Febrero del año pasado, que declaró haber lugar al amparo federal.

2º: La Justicia de la Unión no ampara ni protege á la Sociedad de comercio «Peña y Compañía» contra el procedimiento del C. Administrador de la Aduana marítima de Mazatlán que le exige por medio de la facultad económico-coactiva la cantidad de \$ 11,485 23 centavos, tercera parte de los derechos de importación que causaron las mercancías descargadas en ese puerto por el buque «Gironde», con apercibimiento de exigir el total de esos derechos, en caso de no hacerse el pago en el término señalado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*José M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*J. García Ramírez.*—*Enrique Landá, secretario*

Es copia. México, Febrero 9 de 1874.

*Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor interino.*